

PERÚ, DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Perú, after the elections

Luis PÁSARA

Investigador Visitante. University of Notre Dame

BIBLID [1130-2887 (2001) 28, 87-98]

Fecha de recepción: mayo del 2001

Fecha de aceptación y versión final: junio del 2001

RESUMEN: En este artículo se reflexiona sobre la elección presidencial peruana a partir de los resultados electorales de la primera y la segunda vuelta electoral. El autor sostiene que la elección de Alejandro Toledo no supone una recuperación del país y expone las características de los comicios en los que participó la mitad de la población. Asimismo, analiza el perfil del nuevo elector peruano «el cholo» y lo señala como el nuevo protagonista social del Perú; reflexiona respecto a la salida de Fujimori y Montesinos del poder y puntualiza el papel de Estados Unidos en la caída del régimen fujimorista.

Palabras clave: elecciones presidenciales, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori, relaciones Estados Unidos, Perú.

ABSTRACT: This article analyzes the Peruvian presidential election taking as a point of departure the electoral results of the first and second rounds. The author argues that the election of Alejandro Toledo does not imply a recovery of the country and he presents the characteristics of the electoral contest in which half of the population participated. He also analyzes the profile of the new Peruvian voter, the «cholo», and points to them as new social protagonists in Peru. The author reflects on the exit from power of Fujimori and Montesinos, specifying the role of the United States in the fall of the Fujimori regime.

Key words: presidential elections, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori, US, Peru relations.

«El único consuelo,
en víspera de ciertos duelos electorales entre dos candidatos,
es que al menos uno de los dos perderá».
Gesualdo Bufalino, *El Malpensante*.

El triunfo de Alejandro Toledo en la segunda vuelta de la elección presidencial peruana, aunque inevitablemente abre un capítulo nuevo, no parece despertar muchas esperanzas de recuperación del país. Su elección, respaldada por menos de la mitad de los votantes, debe ser entendida en un contexto en el que muchos electores se vieron forzados a escoger entre dos candidatos poco convincentes. Lo ilustró así una votante anónima, entrevistada entre primera y segunda vuelta, en la cadena radial de mayor audiencia: «Sólo Dios nos podrá ayudar para elegir entre estos dos miserables. El Perú ha demostrado ser un país de ignorantes, porque sólo la ignorancia nos ha llevado a tener que elegir entre García y Toledo» (*El País*, 10/4/01).

Tras una depresión económica que lleva cuatro años y, ahora, con un 52% de la población en condiciones de pobreza, muchos peruanos, aunque finalmente hubieron de pronunciarse por uno u otro, no se dejaron convencer por el discurso de los candidatos. Hasta un mes antes de la elección, un tercio de encuestados mostraba rechazo a ambos y anunciaban la decisión de votar en blanco o viciar el voto.

I

Los resultados de la primera vuelta habían traído algunas sorpresas. La principal, sin duda, fue el voto por Alan García. Sorprendió menos la derrota de una candidata capaz y honesta, como Lourdes Flores, que se rodeó de moros y cristianos –demasiados y excesivamente de derechas, estos últimos– y no supo silenciar a tiempo a un padre que mostró padecer de incontinencia verbal cuando se refirió al adversario Toledo como «auquérido» (llama). Un exceso que, con cierto rezago, expresa el racismo que caracterizó al país hasta hace cierto tiempo.

La segunda vuelta fue menos sorprendente. Toledo ganó porque, puesto en una difícil disyuntiva, el electorado lo consideró desganadamente el mal menor, conforme revelaron numerosos sondeos de opinión. Pero los resultados obtenidos por Alan García (25,7% en la primera vuelta y 41,2% en la segunda) hacen de él cabeza de la oposición al Gobierno de Toledo, que no cuenta con mayoría parlamentaria propia. Si se recuerda que, en enero de 2001, recién vuelto al país, García contaba con la intención de voto de apenas uno entre diez encuestados, en cierto modo, él es un gran triunfador de esta campaña electoral, que ha venido a constituirlo en un candidato de peso para la siguiente elección, en 2006.

A Alan García lo ha beneficiado el hecho de que dos de cada nueve electores de ahora no tuvieran aún 14 años cuando García dejó el Gobierno en 1990. Además, es un gran comunicador; ofrece redistribución y convence o seduce con ella. Pero, en definitiva,

contra él pesó la memoria del elector, que durante toda la campaña electoral llevó a alrededor de la mitad de los encuestados a asegurar que «nunca» votarían por García.

El recuerdo no era desdibujado. A partir de 1985, él dio inicio a la destrucción de las instituciones mediante nombramientos partidizados, que desembocaron en un importante nivel de corrupción. En 1986 ordenó exterminar a los detenidos por actividades subversivas, y proporcionó información falsa después. Aun así, el terrorismo creció sangrientamente durante esos cinco años. Demagógicamente expropió la banca y se negó a pagar la deuda externa; dejó al país en la ruina económica, devorado por la inflación. Por último, su Gobierno apoyó decidida e ilegalmente a Fujimori en la segunda vuelta electoral de 1990, frente al candidato de los partidos tradicionales, Mario Vargas Llosa.

Toledo centró su recta final de campaña en recordar el estado del país en los dos últimos años del Gobierno de García. Ganó así pero no logró obtener la mitad más uno de los votos emitidos en ninguna de ambas vueltas en 2001. Un año antes, en la elección en la que se impuso fraudulentamente Alberto Fujimori, Toledo –como candidato principal de la oposición– obtuvo cuando menos el 45% de las preferencias. Este año, en la primera vuelta recibió el 36,5% de los votos; en la segunda, sólo congregó al mismo 45% que lo votó en 2000.

A lo largo de los últimos meses, Toledo perdió crecientemente credibilidad. Denuncias de diverso tipo –desde una hija no reconocida legalmente hasta una farra dispendiosa que el candidato intentó disimular como secuestro, pasando por un manejo oscuro de los fondos de campaña– fueron minando la confianza en él. Pero, de cara a su tarea de gobierno lo que acaso resulte más grave sea una comprobada duplicidad de lenguaje: lo que aseguró a los líderes sindicales fue completamente contrario a lo que prometió a los empresarios, por ejemplo.

Toledo –autoproclamado como líder de la protesta popular que contribuyó a la caída de Fujimori– ha obtenido un triunfo que resulta deslucido debido a que venció con dificultad y por un margen estrecho a un adversario con tan mal recuerdo ciudadano. El ajustado triunfo de Toledo probablemente se explica porque el candidato evocaba a los peruanos aquello que se aprendió con Fujimori como sucesor de García: siempre puede haber alguien peor que el malo conocido. El entorno de Toledo, que incluye una gama variada de posturas contradictorias, también recuerda a Fujimori entre primera y segunda vuelta. Como entonces, allí se hallan quienes, desde muy diferentes posiciones ideológicas, intentan llenar los vacíos o resolver las inconsistencias inherentes al candidato. A partir de ahora, unos u otros deberán enfrentar el manejo de un país cuyos principales indicadores económicos y sociales de las últimas décadas resultan muy pobres, incluso para estándares iberoamericanos (ver Cuadro 1).

Cuadro I: Perú e Iberoamérica: principales indicadores económicos y sociales

Indicador	Perú	Iberoamérica y el Caribe
Población (1999) (en millones)	25,2	509
Pobreza (1999) (%)	41	-
Mortalidad infantil (por cada 1.000 niños nacidos vivos)	40	31
Producto interno bruto per cápita (1999) (en US\$)	2.350	3.840
Crecimiento anual del producto (1965-1999) (%)	2	3,5
Crecimiento anual del producto per cápita (1965-1999) (%)	-0,3	1,4
Crecimiento anual del valor agregado en la agricultura (1965-1999) (%)	1,9	2,7
Crecimiento anual del valor agregado en la industria (1965-1999) (%)	2,3	3,3
Crecimiento anual del valor agregado en servicios (1965-1999) (%)	1,9	3,8
Crecimiento anual de las exportaciones (1965-1999) (%)	2,6	6

Fuente: Banco Mundial.

II

La situación de decidir el voto sólo después de analizar cuál de los candidatos puede ser peor no es, en modo alguno, nueva para los peruanos. En cuatro de las cinco elecciones presidenciales realizadas desde el final del Gobierno militar (1980) hasta la teñida de fraude en 2000, se le planteó al elector escoger entre opciones malas y muy malas. Establecer los matices y adjudicarlos a los candidatos quedó librado a la subjetividad, la percepción, el criterio o la apuesta de cada cual.

En 1980, Fernando Belaúnde volvió a ser elegido, en buena medida, bajo el mismo principio que, convertido en lema de campaña, había conducido en 1956 al aristócrata Manuel Prado a un segundo mandato: «Tú lo conoces, vota por él». Belaúnde había realizado ya, entre 1963 y 1968, un gobierno en el que no cumplió sus promesas de campaña, salvo las referidas a construcción de carreteras. El desmanejo económico que condujo a una devaluación traumática, primero, y la vergüenza nacional generada por la oscura negociación de un diferendo con la Standard Oil, después, facilitaron un golpe militar que fue recibido con alivio o con esperanza por muchos. Doce años después, al belaudismo le resultó fácil culpar al Gobierno militar de todos los males del país.

La alternativa a Belaúnde, por lo demás, fue Armando Villanueva, candidato del APRA, que corporizó razones para renovar y multiplicar viejos temores frente a su partido. El aprismo, fundado en los años treinta por Víctor Raúl Haya de la Torre, habría de tardar más de medio siglo en llegar al poder, muerto ya el líder. Una de las razones de esa prolongada espera fue su habilidad para ganarse resistencias, entre otras razones, debido a una tradición del recurso a la fuerza contra sus adversarios.

La elección de 1985 contradice la tendencia señalada. Por de pronto, es la elección que menor ausentismo registró en las últimas dos décadas (ver Cuadro II). En parte, ese nivel de participación guarda relación con el hecho de que, entre las cinco últimas elecciones, fue la única en la que el elector votó por el que sí creyó el mejor. Además de

Alan García, que –superando los límites del aprismo– cautivó multitudes, se hallaba la opción por Alfonso Barrantes que para muchos, en la izquierda, era efectivamente mejor. Tanto fue así, que García no alcanzó en primera vuelta la requerida mitad más uno de los votos, y Barrantes le apuró la llegada, al optar por una renuncia a la nueva contienda, que era legalmente discutible.

Cuadro II: Elecciones generales 1956-2000a: electores, votantes, ausentismo y voto blanco/viciado

Año	Electores registrados	Votantes efectivos	Ausentismo (%)	Voto blanco y viciado (%)
1956	1.575.741	1.324.229	16	6
1962	2.221.906	1.969.288	11	14
1963b	2.070.718	1.954.284	6	7
1980c	6.471.101	5.121.328	21	22
1985	8.333.433	7.544.836	9	14
1990 primera vuelta	10.013.225	7.837.116	22	15
segunda vuelta	10.007.614	7.958.232	20	10
1995	11.974.396	8.803.049	26	18
2001 primera vuelta	14.910.175	12.264.349	18	13,5
segunda vuelta	14.906.233	12.312.548	17,4	13

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales, www.onpe.gob.pe

Notas:

a / Las elecciones en primera y segunda vuelta realizadas en 2000 fueron consideradas irregulares, si no fraudulentas, por muy diversos observadores nacionales e internacionales. Las irregularidades incluyeron groseras manipulaciones del registro mismo. En consecuencia, no resulta aconsejable tomar en cuenta sus resultados oficiales para efectos estadísticos y comparativos.

b / La disminución en el número de electores entre 1962 y 1963 corresponde a una depuración del registro electoral, efectuada por un Gobierno militar transitorio, después de que las elecciones de 1962 fueran anuladas bajo cargos de fraude.

c / Entre 1968 y 1990 dos gobiernos militares suspendieron el ejercicio electoral, con la excepción de la elección de una Asamblea Constituyente en 1978. La multiplicación por tres de la cifra de electores debe ser explicada no sólo en razón del incremento demográfico sino también debido a que en la Constitución de 1980: (i) se rebajó la edad para adquirir ciudadanía, de 21 a 18 años, y (ii) se estableció el derecho a voto de los analfabetos.

En esa elección se demostró que, a partir de la percepción ciudadana, el voto produce ganadores, pero no los hace gobernantes. El Gobierno de García tuvo resultados de catástrofe y es bastante probable que Barrantes –rodeado de caníbales políticos mutuamente enfrentados– no hubiera sido mejor. Pero, al votar por ellos, tres cuartas partes del electorado creyó que constituían buenas opciones.

Pocos discuten que el sorprendente triunfo de Alberto Fujimori, en 1990, se explica por el voto contra Mario Vargas Llosa, representante cristalino de los viejos políticos que habían desilusionado al electorado. El elector promedio de «el Chino» –como se le dijo con cariño, no con desprecio– no sabía quién era el personaje ni qué podía esperarse de él. Habría de tardar algo en enterarse. Pero aventurándose a lo desconocido, evitó a Vargas Llosa.

En 1995, Fujimori ganó –aparentemente, porque ahora todo el pasado está bajo sospecha– de nuevo. La opción fue pragmática: votar por quien había terminado con la inflación y con Sendero Luminoso. Pero ¿había realmente otra opción? No lo fue claramente una oposición que, como su desbandada posterior habría de mostrar, era una tienda multicolor donde se reunieron de apuro y transitoriamente todos los políticos contrarios a Fujimori, bajo el estandarte de Javier Pérez de Cuéllar, una figura con más resonancia internacional que liderazgo y peso propios en el país.

Cinco años después, las autoridades declararon ganador a Fujimori, fraude mediante, sin duda alguna, pero sobre la base de no menos del 40% del voto efectivo. Así, en una mitad aproximada del electorado se mantuvo el pragmatismo de quienes preferían conservar «el malo conocido». La otra mitad, al votar por Alejandro Toledo –un personaje casi tan desconocido como Fujimori en 1990– se pronunció contra el amañado intento del fujimorismo de, después de diez años corridos, perpetuarse en el poder. Carente de trayectoria pública, de equipo y de programa de gobierno, Toledo fue en 2000 la apuesta por un fujimorismo «cholo» y sin «el Chino».

Como este repaso histórico sugiere, usualmente, los electores peruanos hemos sentido que votábamos no por el mejor candidato sino por el que podía no ser el peor. El alto número de indecisos, hasta poco antes de la elección, es una de las pruebas de esta tesis. En esas condiciones, el voto, más que opción, es una apuesta.

III

¿Quiénes son los apostadores? Por supuesto, el número de electores se ha multiplicado en un periodo de veinte años. Pero puede que sea de mayor importancia examinar los cambios cualitativos. Probablemente, en los últimos años el elector ha adoptado un perfil distinto, no sólo al de las elecciones previas a los años setenta, sino también en contraste con la mayor parte de Iberoamérica.

En el Perú posterior al periodo del Gobierno militar encabezado por Juan Velasco Alvarado (1968-1975), el «cholo» es el nuevo protagonista social. El «cholo» es el mestizo, alfabetizado y crecientemente urbano. Es verdad que su incorporación como portador de derechos la ganó a fuerza de marchas para demandar políticas sociales e invasiones de tierras para construir una casa, pero también la revolución militar de Velasco le abrió campo. Al pulverizar a la oligarquía terrateniente, mediante una reforma agraria tan radical como improductiva, la revolución militar tocó una clarinada que llamó a los de abajo a buscar posiciones más igualitarias.

En las últimas dos décadas, «cholos» y «cholas» se han convertido, además, en actores electorales, multiplicando el padrón electoral (ver Cuadro II). Esto es, no son más la masa amorfa sujeta a la manipulación grosera del patrón o la influencia decisiva de los medios de comunicación. Si bien el voto es legalmente obligatorio, el peruano medio participa en proporciones relativamente altas. Y escoge. Se equivoque o no, escoge.

O, quizá mejor, apuesta. Esta apuesta fue más evidente que nunca con Fujimori en 1990. El cinismo del entonces desconocido personaje le aconsejó no tener ningún

programa en la primera vuelta, inventar uno para la segunda, e incumplirlo por entero apenas instalado su Gobierno. En sí, este hecho no escandalizó ni desilusionó al elector promedio, un ciudadano cuyo pragmatismo había dejado atrás los principios invocados, a menudo mentirosamente, por el «caballero» limeño.

La apuesta por «el Chino» fue amplia durante una década. Las encuestas confirmaban periódicamente su alto nivel de aprobación. Fujimori encontró una importante base de apoyo –relativamente mayor entre los estratos más bajos– que buscaba eficacia para procurarse resultados. Pero a la carta de los resultados –logrados no importa con qué medios– apostaron no sólo anónimos pobladores de barriada, sino profesionales, empresarios y dirigentes ex apristas y ex izquierdistas.

Tampoco era la primera vez que esto ocurría. En la década previa esa apuesta masiva corrió en favor de la izquierda, que a partir de 1978 sumó un tercio del electorado. No se trataba de una masiva conversión popular a la causa revolucionaria, como parecieron creer varios científicos sociales. Fue también una apuesta, cuyos pobres resultados en el nivel de los gobiernos municipales, abrió paso a Alan García.

Sería difícil asignar contenidos precisos a esas apuestas sucesivas. Buscaban un cambio, sin duda. Pero nada lleva a pensar que el cambio buscado correspondía a una sociedad distinta –como la que soñaron Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui–, excepto en materia de redistribución. Quien ofreció redistribuir, en contraste con quien no, llegó a las urnas en olor de multitud. Si con el viejo dictador Odría fue escuelas en los años cincuenta y con Belaúnde fue caminos en los sesenta, desde Fujimori ha sido empleo. Siempre, la demanda política central consiste en que algo de redistribución llegue abajo. Por algo la campaña de 2001 fue convertida en un torneo de ofertas de incremento inmediato de trabajo y mejoras improbables en las políticas sociales.

A lo largo de los últimos veinticinco años, en el Perú han fracasado ya muy diversos tipos de políticas gubernamentales. El último gobernante militar, Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) dio inicio a las llamadas políticas de ajuste y lanzó una agresiva estrategia antisindical, en la que los despidos masivos se apoyaron en declaraciones de estados de emergencia y toques de queda. Fernando Belaúnde (1980-1985) mantuvo una política aprobada por el Fondo Monetario Internacional, aunque no llegó al neoliberalismo. García, inaugurándose con un enfoque populista, se aventuró en 1985 a una reactivación económica que incrementó empleo y remuneraciones, pero se hallaba irresponsablemente basada en un gasto público desbordado. Tarde, al final de su gobierno volvió al redil de los prudentes –asesorado por Hernando de Soto¹, autor de una «solución instantánea» de gran resonancia internacional– y los efectos sociales del «realismo económico» resultaron devastadores. Desde 1990, Fujimori combinó la obediencia a los

1. Hernando DE SOTO. *El otro sendero*, 8.ª edic. Bogotá: ILD, 1989, 8.ª edic. El autor se hizo cargo de la informalidad masiva que caracteriza la economía y la vida social en el tercer mundo, y propuso la legalización de la propiedad como salida a la pobreza mediante la incorporación al mercado. Tanto Alan García como Alberto Fujimori extendieron sus clientelas políticas mediante el reparto de títulos de propiedad rural y urbana que, ciertamente, no produjo la revolución anunciada por De Soto.

acreedores externos con el saqueo de los fondos públicos, con fines electorales y de beneficio personal para los integrantes de la mafia gobernante. En cada uno de estos periodos de gobierno la economía creció apenas, la pobreza se afirmó y las distancias en términos de distribución del ingreso aumentaron.

En una vía paralela, había sido derrotada la izquierda de todos los matices; la representada por Sendero Luminoso, militarmente, y el resto, electoralmente. En ese marco, el país no ha encontrado proyecto social de recambio. Sólo apuestas pragmáticas. Sería bueno preguntarse si el Perú es un caso aparte en Iberoamérica o sólo muestra adelantadamente una tendencia en la que se inscriben ya Venezuela y Ecuador.

IV

A los peruanos –sobre todo, a quienes nos dedicamos profesionalmente a trabajar con las ideas– nos hace falta hacernos cargo –intelectualmente, digo– del país que tenemos. Hoy, esa tarea debe empezar por reconocer que, tratándose de las violaciones de derechos humanos, el país siniestro de las dos últimas décadas fue el que los peruanos constituimos voluntaria, conscientemente, a cambio de «resultados» en otras áreas. En el Perú, desde Belaúnde hasta Fujimori, pasando por Alan García, hubo pocos engañados sobre este tema. Pese a la manipulación política de la prensa, algunos medios de comunicación se manejaron con libertad suficiente para que nos enteráramos de detenciones masivas e injustificadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y masacres.

Entre nosotros, a diferencia de Chile o Argentina, resulta difícil alegar que no se sabía lo que estaba ocurriendo. Ése acaso sea el principal cuestionamiento a la anunciada Comisión de la Verdad, que sólo puede compilar lo que ya sabemos y la mayoría aceptó. Hasta los nombres de los responsables altos y medios son conocidos y sus fotos han sido publicadas. Para juzgar a los culpables bastaría encargar a los fiscales la tarea de investigar, recopilar pruebas de validez legal y formular las acusaciones.

Desde el autogolpe fujimorista de abril de 1992, la ciudadanía peruana toleró una vía autoritaria y sangrienta pero «eficaz». En la última década, delincuentes, traficantes de drogas y asesinos hicieron desde el Gobierno todo lo que hicieron con impudicia, a la luz y haciendo gala de su «viveza», empezando por Fujimori. Los «vladivideos» –en los que en estos meses se ha visto desfilar a casi toda la clase política y la empresarial, recibiendo dinero malhabido del asesor principal del presidente– sólo precisan la magnitud del fenómeno, no su carácter. Se corrompió, de manera organizada y sistemática, al poder judicial y al Ejército. A sabiendas de todo, o casi todo, los peruanos reeligieron al personaje central en 1995 y, casi, en 2000.

Es comprensible y respetable el sentimiento de quienes declaran vergüenza, rabia e indignación. Pero la mayoría de nuestros compatriotas adoptaron libremente la ruta que llevó a esto. Desde los dirigentes empresariales hasta algunos intelectuales prestigiados, las alabanzas a Fujimori fueron renovadas hasta la hora undécima, incluso después de la fuga de Montesinos y el lanzamiento a la TV de los primeros vídeos.

Si la pareja Montesinos/Fujimori tuvo que huir no fue porque los sentimientos de decencia se hubieran convertido de pronto en mayoría nacional. Montesinos pagó caro el error de intentar la venta de armas a las guerrillas colombianas. Washington, que lo había tolerado con complacencia, no lo aceptó más en el poder –no podía tolerarlo– y, desde entonces, el escenario fue otro². El cambio de postura de Estados Unidos se posó sobre un descontento ciudadano ya existente, generado por el fraude y, sobre todo, el incumplimiento de las promesas redistributivas, debido tanto a una política económica que siempre trató de hacer buena letra con el Fondo Monetario Internacional, como a la magnitud del saqueo llevado a cabo por la mafia.

Advirtamos que el proceso social degenerativo no se circunscribe al Estado ni empezó con Fujimori. Él y su asesor llevaron el asunto más lejos de lo que nadie podía prever. Pero el proceso viene de atrás y de abajo. La escena pública ha terminado reflejando su escandalosa desembocadura. Por eso es que resulta penoso que, en el Perú de estos días, haya quien encuentre cómodo echarle la culpa sólo a Montesinos y al audaz ingeniero japonés, e incluso, declararse retroactivamente crítico u opositor. ¿Cuántos, como la entrevistada radial citada al inicio, están dispuestos a reconocer la profundidad a la que el país se arrojó?

V

En el Perú, como en otros países iberoamericanos a los que les ha ido muy mal, la clase dominante nunca se hizo cargo del país que recibió. La consecuencia en el caso peruano consistió en que no se crearon canales adecuados para incorporar –o, admitir, si se prefiere– a los indios, primero, y a los «cholos», después. Como indios nunca pudieron «ingresar» en la «sociedad nacional». Hechos ya «cholos» –mediante migración, escolarización y urbanización–, se abrieron paso como pudieron, en calidad de transgresores debido a que no había mecanismos regulares para hacerlo.

El «desborde popular» al que en tono esperanzado se refirió José Matos Mar en un libro de gran difusión³ tuvo una cara menos romántica; en verdad, consistió en

2. El papel de los Estados Unidos durante la dictadura fujimorista requiere un análisis por separado. Al corriente de lo que ocurría en materia de derechos humanos e incluso de las conexiones entre personajes de la mafia gobernante y el narcotráfico internacional, en Washington prevaleció el criterio de apoyar a un Gobierno en el que Vladimiro Montesinos les garantizaba, cuando menos, acceso a cierta información clave. Según informes de prensa norteamericanos, la agencia encargada del narcotráfico (DEA) y la encargada de inteligencia (CIA) consideraban provechosa su relación con Montesinos, y lograron imponerse sobre los criterios en contrario del Departamento de Estado. El hecho de que el embajador estadounidense respaldara la propuesta del renunciante Fujimori, cuando el escándalo ya había estallado, de permanecer hasta el 28 de julio de 2001 como organizador de un nuevo proceso electoral, muestra hasta dónde llegó esta postura. El apoyo estadounidense al Gobierno de Fujimori vino a ser tardía y bruscamente interrumpido por éste cuando huyó del país.

3. José MATOS MAR. *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. 7.ª edic. Lima: José Matos Mar editor, CONCYTEC, 1980. Como el título del trabajo sugiere, el

un ingreso de «los de abajo», pero sin cauces, sin pautas, sin normas. La imagen de la invasión para constituir una barriada, bajo leyes propias, ilustra bien el conjunto de un fenómeno más amplio. Su expresión degenerativa –ya notable hace veinte años– fue lo que mereció la invención de una palabra: «achoramiento». Esta expresión aludía a la puesta de lado sistemática de toda regla en la vida cotidiana, en una gama de formas, a menudo delictivas, que se nutren del engaño y la violencia. Quedaron en el olvido tanto las normas sociales que habían regido la sociedad limeña, como las leyes impuestas formalmente por un Estado que una buena parte de la población pobre seguía percibiendo como parcialmente ajeno.

Si el encauzamiento político de la presión social venida de abajo fue, en los años treinta, la base del proyecto aprista –trionfador neto sobre el comunismo de Mariátegui–, su fracaso en los años sesenta –cuando el APRA pactó con la oligarquía en la esperanza de que se le permitiera llegar al poder– dejó pendiente la tarea. El Gobierno militar de Velasco Alvarado la retomó; pero, si bien cumplió la fase destructora de toda revolución, no creó mecanismos sustitutivos, como los montados por el PRI para durar siete décadas en México. Velasco demolió a los dueños del Perú pero no creó un sistema de identidades, valores y normas alternativo.

En un balance de las últimas décadas, hace falta incluir el narcotráfico y considerar sus repercusiones sociales en profundidad. Mantener la ilegalidad de la droga e intentar en apariencia combatir su comercio –en nombre de una política antidrogas que es ineficaz en todo el mundo– corrompió profundamente al Estado peruano de la historia reciente. Las instituciones del sistema de justicia y, luego, las Fuerzas Armadas, han sido penetradas por los intereses del narcotráfico. Al mismo tiempo, al constituirse en un canal de ascenso social muy importante, en medio de una sociedad habitada permanentemente por la crisis de empleo y de ingresos, el tráfico de drogas distorsionó de manera duradera las bases del funcionamiento social.

Perú no es el único país corroído por el proceso generado por el narcotráfico pero, con Colombia, es el que muestra efectos sociales más profundos. En el caso peruano, la situación resulta agravada por una economía que hace mucho resulta incapaz de dar empleo adecuado a la mayor parte de la población económicamente activa. En tal contexto social, donde la mayoría busca sobrevivir, el delito resulta a paso corto.

VI

Como se indicó, en las semanas transcurridas entre primera y segunda vuelta, las encuestas detectaron que aproximadamente un tercio de los entrevistados anunciaban que votarían en blanco o viciarían su voto. Mostraban así su disconformidad radical con los términos de la opción planteada –es verdad que por decisión de la mayoría

autor creyó ver en el creciente protagonismo popular una síntesis cultural que daría forma a una sociedad distinta y mejor.

del electorado— para la segunda vuelta. Sin embargo, el voto en blanco/nulo fue estigmatizado por autoridades y comentaristas peruanos —entre ellos, el primer ministro del Gobierno de transición, Javier Pérez de Cuéllar— como un voto negativo e incluso antidemocrático. Un conjunto de personalidades, en la semana previa a la segunda votación, también descalificaron al voto blanco/nulo, forzando moralmente al ciudadano a escoger entre la sartén y las brasas.

¿Qué puede hacer el ciudadano de una democracia, en la que votar es legalmente obligatorio, cuando considera que ninguna de las opciones que se le ofrecen son aceptables? El voto en blanco/nulo es legítimo y constituye un claro anuncio de la insuficiente representatividad del Gobierno así elegido. En el caso peruano, además, señala un giro ciudadano en reclamo de algo mejor. Es la renuncia a la apuesta pragmática para la que, durante las últimas dos décadas, los peruanos tuvimos alguna excusa en la pobreza de la oferta política, que nos educó en cierto nivel de resignación a ser adoptado para la hora de ir a votar.

Desde hace veinte años, la oferta de contenidos democráticos es en el Perú débil o ausente. De ahí, en parte, surgió un elector en cuya cultura política votar es un rechazo al pasado inmediato y una apuesta a que, esta vez, «a mí puede tocarme algo». Ese horizonte ciudadano no es compatible con una democracia robusta. Es verdad que tampoco el voto en blanco/nulo fortalece el régimen democrático. Pero sí es una campana de alarma, que llama a la renovación del sistema político.

La debilidad de la democracia política no es exclusiva del Perú. En toda Iberoamérica se comprueba que el solo hecho de votar periódicamente no expande la institucionalidad democrática, ni contribuye a la democratización social. Ahí están, para demostrarlo, Argentina, Colombia o Ecuador. En la mayor parte de la región, los altos niveles de pobreza, el estancamiento de la economía y el incremento constante de delito y violencia aconsejan a muchos migrar, como vía de escape de países que no ofrecen un horizonte de viabilidad. Con las excepciones de Chile, Uruguay y Costa Rica, las instituciones del régimen político no muestran señales de consolidación.

En el caso peruano, el panorama institucional confirma que no se está saliendo de un pozo, ni cerrando un paréntesis. La elección de Alejandro Toledo no parece destinada a resolver las preguntas de fondo y más complejas: ¿Cómo curar una judicatura donde la gran mayoría de sus integrantes no se atrevieron a decir que no cuando correspondía hacerlo? ¿Cómo sanear unas Fuerzas Armadas en cuya alta oficialidad no hubo quien tuviera el coraje de renunciar cuando se les pidió complicidad con graves e innumerable delitos? ¿En nombre de qué moral pública combatir el tráfico de drogas? ¿Cómo responder y combatir un posible rebrote subversivo?

El paisaje de podredumbre institucionalizada —hecha comportamiento regular y relativamente aceptado— es el que, de cara a un futuro mejor, resta carácter decisivo al proceso electoral de este año en el Perú, que así no ve acercarse las posibilidades de salir del hoyo. Parece muy difícil que Alejandro Toledo pueda conducir una tarea de transformación y regeneración nacional, en los cinco años que empieza.

Resultados de las elecciones presidenciales del 8 de abril de 2001

Partido	Candidato	Votos válidos	% votos válidos
PERÚ POSIBLE (PP)	Alejandro Toledo	3.871.167	36,51
PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP)	Alan García	2.732.857	25,78
UNIDAD NACIONAL (UN)	Lourdes Flores	2.576.653	24,30
FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR (FIM)	Fernando Olivera	1.044.207	9,85
SOLUCIÓN POPULAR (SP)	Carlos Boloña	179.243	1,69
RENACIMIENTO ANDINO (RA)	Ciro Gálvez	85.436	0,81
PROYECTO PAÍS	Marco Arrunátegui	79.077	0,75
TODOS POR LA VICTORIA	Ricardo Noriega	33.080	0,31
Votos nulos		402.436	
Votos blancos		1.260.193	
Total de votos válidos		10.601.720	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales de la ONPE.

Resultados de las elecciones legislativas del 8 de abril de 2001

Partido	N.º de votos	Porcentaje de votos válidos	N.º de escaños
PERÚ POSIBLE (PP)	2.477.624	26,30	45
PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP)	1.857.416	19,71	28
UNIDAD NACIONAL (UN)	1.304.037	13,84	17
FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR (FIM)	1.034.672	10,98	11
SOLUCIÓN POPULAR (SP)	333.172	3,57	1
PROYECTO PAÍS (PP)	155.572	1,65	
TODOS POR LA VICTORIA	191.179	2,03	1
FREPAP	156.264	1,66	
SOMOS PERÚ (SP)	544.193	5,78	4
ACCIÓN POPULAR (AP)	393.433	4,18	3
UNIÓN POR EL PERÚ (UPP)	390.236	4,14	6
RENACIMIENTO ANDINO (RA)	127.707	1,36	1
CAMBIO 90-NUEVA MAYORÍA	452.696	4,80	3
Total escaños			120
Votos nulos	1.352.780		
Votos blancos	1.213.152		
Total de votos válidos	9.421.709		

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales de la ONPE.

Segunda vuelta realizada el 3 de junio de 2001

Partido	Candidato	N.º de votos	Porcentaje de votos válidos
PERÚ POSIBLE (PP)	Alejandro Toledo	5.548.556	53,08
PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP)	Alan García	4.904.929	46,92
Votos nulos		1.341.938	11,06
Votos blancos		333.546	2,75
Votos emitidos		12.128.969	81,37
Total de votos válidos		10.453.485	86,19
Electores hábiles		14.906.233	81,37

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales de la ONPE.